

**E**l acuerdo entre Argentina y Bolivia, para la venta y distribución de gas natural, ha provocado graves consecuencias para la ya delicada situación de suministro que enfrenta nuestro país. Se nos dice una y otra vez que el gobierno trasandino cumpliría sus contratos actualmente vigentes con Chile; aunque, en los hechos, no existe ninguna evidencia para sostener una afirmación tan optimista como ingenua. Peor todavía, me temo que el lenguaje de la diplomacia—tan plagado de eufemismos— ha terminado por contaminar nuestra discusión interna, haciendo parecer como “políticamente incorrecto” el que se sostengan ciertas posiciones en esta materia.

Así, por ejemplo, creo debe decirse con claridad que nuestro país no está en condiciones de generar —a través de recursos propios— la energía que consumen sus ciudadanos y empresas. Más allá de la evidente necesidad de diversificar nuestras fuentes energéticas, lo cierto es que todas las alternativas de producción interna—con excepción de la hidroeléctrica— resultan marginales para satisfacer los volúmenes requeridos.

En el caso del norte de Chile, la situación es todavía más compleja. No habiendo grandes caudales, en los pocos ríos existentes, la única manera de abastecer de energía eléctrica a los ciudadanos y a las empresas—mineras en su gran mayoría (públicas y privadas)— es a través de gas natural o carbón. En ambos casos hay

## ¿Gas natural por salida al mar?



**Jorge Navarrete P.**  
*Abogado y ex Subsecretario  
General de Gobierno*

que importarlo, con la diferencia de que la generación de electricidad a carbón tiene un muy elevado costo ambiental, el que resulta difícil de soslayar para un país que aspira al crecimiento sustentable. Así se pensó y decidió en el pasado. Sin embargo, después de millonarias in-

versiones para poder traer el gas natural desde Argentina, los chilenos hemos sido testigos de cómo una y otra vez se incumplen en forma flagrante los acuerdos suscritos.

Bolivia ha insinuado más de alguna vez que estaría dispuesto, en condiciones privilegiadas, a proveer de gas natural a cambio de ver satisfecha su histórica demanda marítima. Sin duda se trata de un tema complejo, con implicancias internacionales y geopolíticas evidentes. Con todo, cualquiera sea el destino de semejante iniciativa, resulta vital que no perdamos de vista lo fundamental. Primero, se trata de un tema de Estado, que requiere del mayoritario apoyo de las fuerzas políticas y sociales del país, sin que éste se transforme en una oportunidad para pequeñas ventajas políticas de uno u otro sector. Segundo, se requiere una discusión abierta y desprejuiciada en torno a las múltiples fórmulas que se han planteado para darle a Bolivia una posible salida al mar: no hay mejor patriota que aquel que vela por el bienestar de su país y sus ciudadanos. Por último, de decidirse explorar este camino, la experiencia reciente indica que Chile debe poner todas las salvaguardias que aseguren, en forma eficaz y permanente, la posibilidad de contar con un suministro suficiente y a un precio que refleje la real urgencia que Bolivia tiene por resolver el tema.

Contrario a lo que se dice y lo que se lee, no tenemos muchas más reales alternativas.